

EL MEGAPROYECTO HIDROELÉCTRICO DE BELO MONTE EN BRASIL: Impactos múltiples

Luis MIGUEL UHARTE

UPV/EHU

luismiguel.uharte@ehu.es

THE 'BELO MONTE' HYDROELECTRIC MEGAPROJECT IN BRAZIL: multiple impacts

Resumen: El presente trabajo pretende realizar un análisis crítico del megaproyecto hidroeléctrico Belo Monte, que se está construyendo en plena selva amazónica (Brasil), por parte del consorcio Norte Energia. El objetivo fundamental es identificar los principales impactos que la construcción de la tercera presa más grande del mundo está generando y que son de orden diverso: económicos, políticos, ambientales, sociales, culturales... La base de la investigación ha sido el trabajo de campo en el que se han realizado una serie de entrevistas a diversas personas referenciales de diferentes ámbitos (político, movimientos sociales, académico, sindical, etc.), durante nuestra estancia a lo largo del mes de marzo y abril de 2012.

Abstract: This paper aims to make a critical analysis of the Belo Monte hydroelectric megaproject, which is being built in the Amazon jungle (Brazil), by the Norte Energia consortium. The main objective is to identify the main impacts that the construction of the world's third dam is generating in different fields: economic, political, environmental, social, cultural... To this end, we conducted a series of interviews with key social actors from different fields (political, social movements, academia, labor, etc.), during our stay throughout the month of April 2012.

Palabras clave: Proyecto desarrollista. Impactos democráticos. Impactos comunitarios
Developmental project. Democratic impacts. Community impacts

Introducción: Belo Monte, un viejo proyecto desarrollista

La presa de Belo Monte está siendo construida en plena selva amazónica, en el Estado de Pará, en el norte de Brasil. Existen tres municipios importantes cerca de la obra, que van a verse afectados en mayor o menor medida: la ciudad de Altamira, que es el núcleo poblacional más grande con unos 100.000 habitantes aproximadamente y los municipios de Vitoria do Xingu, con 13.480 habitantes y Brasil Novo con 18.749.

En términos socio-económicos estos municipios están ubicados en una de las zonas más vulnerables del país (el Norte), notablemente alejados de los estándares de vida medios del sur de Brasil (Sao Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, etc.). Los niveles de pobreza son más acusados y el desarrollo industrial mucho menor que en las citadas ciudades. Son lugares, según afirma el profesor Celio Bermann, donde la presencia del Estado históricamente ha sido muy débil y fundamentalmente restringida al orden público (Bermann 2012a).

El de Belo Monte no es un proyecto nuevo, ya que el primer intento de construir una gran hidroeléctrica en la zona se produjo en los años setenta, en la época de la dictadura militar y sus planes desarrollistas. El profesor y experto en temas energéticos Oswaldo Sevá asegura que el grupo empresarial privado Camargo Correa tenía mucha influencia en la empresa estatal eléctrica Eletronorte y fue quien realmente presionó para que el proyecto fuera aprobado (Sevá 2012a: 1). Sin embargo, la resistencia popular que se generó en la zona consiguió que finalmente el proyecto fuera paralizado durante unos años, según afirman diferentes líderes sociales del lugar (Vargas 2012 & Melo 2012).

El gobierno de Lula será el que rescate el viejo proyecto y lo incluya dentro de su plan de desarrollo. El profesor Celio Bermann indica que en el “Plan de Expansión de Energía 2011-2020” el gobierno brasileño pretende construir “12 centrales hidroeléctricas en la región amazónica”, que representan el 65% del total de proyectos en ese periodo. Para el año 2030, el Ejecutivo pretende duplicar la potencia hidroeléctrica, pasando de los 78.200 megavatios actuales (año 2011) a 156.300 MW (Bermann 2012a: 2).

El actual proyecto de Belo Monte responde al modelo neodesarrollista del gobierno brasileño y a su filosofía de crear corporaciones empresariales de capital mixto (público-privados). En este caso, se ha creado el consorcio Norte Energia que agrupa a empresas públicas como Eletrobras, Chesf y Eletronorte y a privadas como Neoenergia. En el reparto de acciones el Grupo Eletrobras es quien tiene una participación mayor, con un 49% del total distribuido de la siguiente manera: Eletrobras un 15%, Chesf (Companhia Hidro Elétrica do São Francisco) otro 15% y Eletronorte un 19,98%. Por otra parte, dos fondos de pensiones controlan un 15% de las acciones: Petros, un 10% y Funcef un 5%. Neonergia a través de Belo Monte Participações S.A. tiene un 10% y la multinacional minera brasileña Vale do Rio Doce un 9% (Norte Energia 2013).

La presa tendrá una capacidad instalada de 11.233 megavatios, lo que le convertirá en la tercera hidroeléctrica más grande del mundo, tras la de las Tres Gargantas en China (22.500 MW) y la de Itaipú (14.000 MW), que es propiedad de los gobiernos brasileño y paraguay y se encuentra en la frontera entre ambos países (Becerra 2012). Según datos de Iberdrola (empresa participante en el proyecto) en junio de 2011 consiguieron la licencia para el inicio de la construcción y en julio el banco público brasileño BNDES (Banco Nacional de Desarrollo) concedió el primer préstamo por valor de 1.100 millones de reales (más de 440 millones de euros). (Iberdrola 2012: 13).

Hasta fines del año 2009, los pueblos indígenas fueron uno de los sectores que con mayor fuerza se opusieron a la instalación de Belo Monte, pero tras la exitosa política de cooptación de Norte Energia (Ribeiro 2012), de la que hablaremos con más detalle posteriormente, han sido parcialmente neutralizados. Actualmente, dos movimientos sociales lideran la lucha contra Belo Monte: por una parte, Xingu Vivo, que es una coordinadora de

diferentes movimientos ciudadanos de la región que se oponen al proyecto; por otra parte, el movimiento de apoyo a las y los afectados por las represas, el MAB (Movimiento dos Atingidos por Barragens).

Las grandes corporaciones y sus impactos

La literatura crítica relativa a las grandes corporaciones y a los impactos múltiples que generan es extensa y se remonta muy atrás en el tiempo, desde el surgimiento y expansión del fenómeno de las empresas multinacionales (Teitelbaum 2010: 36). A lo largo de la historia del capitalismo su centralidad ha sido indudable y a principios del nuevo siglo, en el marco del actual proceso de globalización neoliberal, diversos autores coinciden en identificarlas como una de las instituciones dominantes de nuestro tiempo (Petras & Veltmeyer 2007: 63, Achbar & Abbot 2009, Carrión & Verger 2007: 10, Sánchez Pérez 2008, Zabalo 2007: 7, Hernández Zubizarreta 2009b: 111-3, Teitelbaum 2010)

Los impactos que generan son múltiples y por tanto no se circunscriben solo al ámbito económico, sino que se manifiestan en otros campos como el político, el social, el laboral, el ambiental, el cultural, etc. A continuación, vamos a señalar de manera muy sintética, algunos de los impactos más habituales que suelen provocar las corporaciones.

En el ámbito económico los impactos que generan las corporaciones son diversos. Por un lado, tenemos la mercantilización de servicios públicos (gas, electricidad, agua) que se ha producido en las tres últimas décadas, provocando la conversión de “bienes públicos” en “mercancías”, y por tanto, tornando prioritaria la “lógica de lucro” frente a la “lógica de asegurar un servicio público básico a toda la población” (Uhart 2005: 109-110). Por otro lado, la reducción de soberanía nacional, cuando se permite la inserción extranjera en sectores estratégicos (Petras & Veltmeyer 2007: 223). A su vez, debemos señalar los elevados márgenes de rentabilidad que obtienen muchas empresas, como consecuencia de la transferencia de riqueza de manos públicas a privadas a través de diversos mecanismos: privatización a bajo costo, legislación que permite altos precios del servicio, subvenciones públicas y ventajas fiscales (reducción de impuestos), imposición de salarios bajos, etc.

En el terreno político, algunas grandes corporaciones distorsionan el funcionamiento del sistema democrático. Se sirven de diferentes instrumentos, como por ejemplo, la práctica del *lobby*¹. Hernández Zubizarreta (2009b: 132) advierte de los “múltiples recursos económicos” que las corporaciones invierten para influir en las decisiones políticas tanto de organismos nacionales como internacionales. Paralelamente, destaca la *corrupción* a través del soborno a funcionarios, cargos gubernamentales, etc., a los que se les promete una remuneración a cambio de legislar a su favor, adjudicar contratos de obra o servicio, conseguir un trato de privilegio... (Carrión & Verger, 2007: 12)². Otro impacto relevante es la incidencia de las corporaciones en los medios de comunicación. Carrión y Verger (2007: 13) apuntan que hoy día, los *mass media* “no acostumbran a informar” sobre los “abusos que se derivan de la actividad” de las corporaciones, porque tienen “una estrecha relación con ellas” (vía publicidad o control de acciones en los medios). El nuevo marco jurídico favorable a las multinacionales que se ha ido configurando a nivel internacional es otro aspecto clave. Hernández Zubizarreta (2009a: 20-3) afirma que “es flagrante la asimetría entre la evolución del derecho comercial global y la del derecho internacional de los derechos humanos”. La

1 En el informe del PNUD de 2004 sobre “La democracia en América Latina” algunos presidentes de la región destacaron la influencia creciente de los lobbys de las grandes corporaciones y reconocieron que esto suponía un “obstáculo a la democracia” (Hernández Zubizarreta 2009b: 118).

2 Al ser una práctica “oculta” resulta difícil de medir, aunque la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) calcula que el soborno internacional se acerca los 150.000 millones de dólares al año en todo el mundo, y Transparencia Internacional lo eleva a los 400.000 millones (Hernández Zubizarreta 2009b: 128-9).

criminalización de grupos opositores es otro impacto reseñable. Ramiro (2011: 11) apunta que “en muchos casos, los integrantes de organizaciones sociales que han criticado el poder de las corporaciones han sido criminalizados y reprimidos por la fuerza pública o por milicias paramilitares”.

Los diversos impactos ambientales constituyen otra dimensión de gran relevancia. Destacan las múltiples formas de contaminación (emisión de gases efecto invernadero, vertidos tóxicos...), y la destrucción del hábitat y la biodiversidad, que son una consecuencia directa del modelo desarrollista en el que estamos insertos. La presencia de las corporaciones en áreas altamente contaminantes como las industrias extractivas (hidrocarburos, minería, etc.) las coloca en una posición de primer orden entre los agentes responsables (Petras & Veltmeyer 2007: 228).

En el plano laboral los impactos son también diversos, tanto en relación con el derecho al trabajo, como con el derecho a trabajar en condiciones dignas (Teitelbaum 2010: 87). Reducción salarial, fin de la estabilidad laboral, supresión de los convenios colectivos, tercerización de algunas áreas, aumento de la inseguridad laboral, discriminación por género, etnia, etc., son algunas de las principales denuncias que se realizan contra las corporaciones. A esto hay que añadir el ataque a los derechos sindicales como la libertad de afiliación, el respeto a la acción sindical sin represalias, etc. (Teitelbaum 2010: 105).

Las comunidades de los lugares donde las corporaciones tienen presencia se convierten en algunos casos en sectores afectados por sus prácticas. Los impactos son diversos según el tipo de empresa: desplazamientos de población, pérdida de tierras, impactos en la economía local (agricultura, pesca...), deterioro del tejido social, de los vínculos afectivos. También destacan los impactos que padecen las y los usuarios de servicios públicos (distribución de gas, agua, electricidad): aumentos desproporcionados de tarifas, exclusión de grupos de población de barrios populares o de zonas rurales no considerados “rentables” (Ramiro 2011: 10-11).

Los pueblos indígenas aparecen también como un grupo especialmente vulnerable a las prácticas de las grandes corporaciones. Las agresiones a su territorio —tanto a su propiedad como a los recursos de que disponen—, a su identidad cultural y a sus modos de organización política son algunas de las violaciones más denunciadas. Berraondo (2008: 93) asegura que existe un “cuadro recurrente” de violaciones a los pueblos indígenas como la expropiación de tierras, la reubicación, la inundación de sus territorios, la discriminación, la destrucción medioambiental de su hábitat, la represión, etc. Podemos destacar los conflictos como el de los pueblos originarios de la Amazonia peruana contra las mineras, el de los mapuches frente a corporaciones eléctricas en Chile, etc. (Ramiro & González 2010: 189-200).

Impactos múltiples del megaproyecto de norte energía

Soberanía. Un primer impacto de orden económico es el debilitamiento de la soberanía nacional en un sector estratégico como es la electricidad. La inserción de transnacionales en Brasil se inició en el subsector de la distribución: en poco más de un lustro (1995-2001) llegaron a controlar más del 50% (MAB 2010: 12). En los últimos años la empresa pública Eletrobras ha reducido su peso en generación, pasando del 71% en 2003 al 36% en 2011 (CEPAL 2012: 232-42). Este avance de las multinacionales en generación se está evidenciando también en la región amazónica. El 65% de los proyectos hidroeléctricos para la década 2011-2020 se ubicarán en el Amazonas, según el Plan energético del Ejecutivo de Brasilia, y el capital internacional asumirá un papel relevante (Bermann 2012a: 2). En consecuencia, la soberanía nacional seguirá deteriorándose, aunque relativamente balanceada por la presencia del capital nacional, producto de la orientación neodesarrollista del actual gobierno.

El profesor de la Universidad de Sao Paulo Celio Bermann establece una relación estrecha entre la expansión de la frontera eléctrica en la cuenca amazónica y el fortalecimiento del capital internacional: “la amazonia es efectivamente el territorio que va a sufrir la presión del capital internacional para transformar sus ríos en yacimientos de megavatios” (Bermann 2012a: 2). El profesor Sevá de la Universidad de Campinas plantea un análisis similar y precisa que la electricidad que producirá Belo Monte y el resto de presas proyectadas en la amazonia será para abastecer al “complejo minero-metalúrgico transnacional” ubicado en la región. Procesadoras de aluminio, bauxita y otros minerales están situadas en la región, controlando sus minas y exportando todo ese material “a precios ventajosos para chinos, japoneses, europeos y norteamericanos” (Seva 2012a: 16-7)³.

Desde los movimientos sociales que se enfrentan al proyecto de Belo Monte, la lectura es similar. Moises Da Costa (2012), miembro del movimiento de apoyo a los afectados por las grandes represas, caracteriza el megaproyecto como “una obra del gran capital y en función de sus intereses”. Hasta los defensores de la obra no pueden ocultar que el proyecto beneficiará al capital internacional. Alexander Brunelli (2012), prefecto del municipio Brasil Novo, reconoce que “gran parte será para las multinacionales, de eso no tengo duda, pero por otro lado un país no se desarrolla sin energía eléctrica”.

Mercantilización. Una revisión superficial de cómo están distribuidas las acciones del consorcio Norte Energia podría hacernos pensar que la importante presencia de capital público se corresponde con un proyecto de filosofía pública y por tanto alejado de lógicas mercantilistas. De hecho, sólo el grupo público Eletrobras controla el 49,98% de las acciones y CEMIG (empresa del Estado de Minas Gerais), a través de Amazonia controla un 9,77%⁴.

Sin embargo, la filosofía que subyace a la construcción de Belo Monte es notablemente mercantilizadora y se expresa en lo que antes hemos caracterizado como el plan de producción masiva de energía eléctrica para abastecer al complejo empresarial minero-metalúrgico que está presente en el Amazonas. Esto significa que la política energética nacional se diseña partiendo de los intereses del mercado y no tanto en función de las necesidades de la ciudadanía, aunque se disfrace como un “plan nacional”, como critica Bermann (2012a: 10): “Esta manera de conducir la política energética robustece la idea de que el mercado es la institución privilegiada y efectivamente orientadora de las relaciones sociales y del establecimiento de lo que debe ser producido [...] bajo la salvaguardia de un plan nacional”.

Bermann (2012a: 2) plantea la hipótesis de que precisamente Belo Monte es el “paradigma para el proceso de expansión” de la mercantilización hidroeléctrica en la cuenca amazónica a pesar de que se disfrace con promesas de bienestar social. Bermann (2012a: 13) recuerda que Belo Monte repite el mismo discurso “de redención de los pueblos” que ya se utilizó con el ciclo de la goma y posteriormente con la construcción de la autopista transamazónica, ninguno de los cuales trajo bienestar colectivo. Sevá (2012a: 31), por su

3 “Para aqueles brasileiros que ainda acham que na economia da Amazonia só pesam a madeira de lei, o gado, a soja, é bom registrar que já estão instaladas ali por perto do projeto Belo Monte, entre o leste do Pará e a metade Oeste do Maranhão: a maior mina de bauxita do mundo (MRN, em Oriximiná) e está sendo aberta a segunda maior (Jurutis, perto de Santarém), a maior fabrica de alumina, Alunorte, na região de Abaetetuba, no baixo Tocantins, as duas maiores fundições de aluminio, a Albrás en Abaetetuba e a Alumar, na Ilha de São Luis, Maranhão, mais a maior concentração de grandes minas metálicas do mundo atual, nas Serras Carajás” (Seva 2012a: 16-7).

4 El resto de las empresas que integran Norte Energia son privadas. Por un lado tenemos a dos fondos privados de pensiones, Petros y Funcef, con el 10% y el 5% de las acciones respectivamente. Por otro lado, un fondo de inversiones denominado Caixa FIP Cevix controla un 5% del capital, mientras que Neenergía —controlada por la eléctrica española Iberdrola con un 39% de las acciones— es propietaria de un 10%. Finalmente destacan la multinacional minera Vale do Rio Doce (9%) y la siderúrgica Sinobras (1%), que aparecen como “autoproductoras” (Norte Energia 2013).

parte, asegura que todos estos megaproyectos “siempre dejaron tierra arrasada”.

La lógica mercantilizadora se manifiesta también en el gran negocio que se ha creado en torno a la construcción de hidroeléctricas, en el que están participando las grandes constructoras privadas del país (Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutierrez, etc.), como acertadamente señala Sevá (2012a: 23). Estas empresas privadas están participando en la construcción de la presa de Belo Monte, y son las que lideran otras obras importantes en Brasil, altamente lucrativas por las pésimas condiciones laborales, según indica Atenagoras López (2012) dirigente sindical.

Rentabilidad. La rentabilidad que algunas de las empresas que conforman Norte Energia van a obtener de la hidroeléctrica de Belo Monte va a ser notable y sobre todo en detrimento de las arcas del Estado y de los trabajadores, como vamos a evidenciar a continuación. En primera instancia, debemos señalar que la producción de energía hidroeléctrica es una de las más baratas que existen (Vainer 2012, Bermann 2012b, Sauer 2012, Seva 2012b). Por tanto, para empresas distribuidoras como Neenergia, será un gran negocio vender después en el Nordeste de Brasil, a los altos precios que habitualmente factura (Gonçalves 2007: 366).

Por otro lado, hay que destacar el alto componente de financiación pública que tiene el proyecto, ya que un 80% será financiado por las arcas públicas por lo que el riesgo para Norte Energia es prácticamente inexistente. Sevá (2012a: 21), asegura que el modelo es el siguiente: el tesoro nacional le presta dinero al BNDES (banco público) y este a su vez le presta a Norte Energia; el Estado asume todos los riesgos financieros, ya que si por ejemplo “una decisión judicial ordena paralizar las obras por cuestiones de licencia ambiental”, el perjudicado será este, que adelantó el dinero, y no las empresas privadas.

Un último mecanismo que le proporciona a Norte Energia un gran nivel de rentabilidad en Belo Monte es la elevada tasa de explotación laboral, en detrimento por supuesto de las condiciones de los trabajadores de la obra. Atenagoras López (2012), miembro de la Ejecutiva Nacional del sindicato Conlutas y responsable del seguimiento de las condiciones laborales en decenas de obras en Brasil, asegura que los bajos salarios, unidos en el caso de Belo Monte a la supresión del ingreso por desplazamiento y a la reducción de días libres para poder visitar a las familias, configuran un escenario de extracción de plusvalía sumamente rentable para Norte Energía.

Eficiencia. Diversos expertos del sistema eléctrico brasileño aseguran que en base a estudios realizados sobre la capacidad real de producción que tendrá la futura hidroeléctrica de Belo Monte, esta generará un volumen de electricidad sustancialmente menor del que se publicita, lo cual pondría sobre la mesa un problema de ineficiencia grave. El profesor de la Universidad de Campinas Oswaldo Sevá cita una investigación de un grupo de profesores del Departamento de Ingeniería Eléctrica de su propia universidad, según la cual en los tres meses secos del año (...) el nivel de producción sería de 1.300 megavatios, es decir, poco más de un 10% de la capacidad instalada (11.233 MW) (Sevá 2012a: 15). En la misma línea, Celio Bermann, profesor de la Universidad de Sao Paulo, asegura que “la central de Belo Monte fue sobredimensionada”, ya que “la capacidad de 11.200 MW sólo estará disponible durante tres meses al año”. En los “meses de septiembre y octubre” incluso, cuando el río Xingu tiene un caudal mucho más bajo, “la capacidad utilizable de la planta hidroeléctrica no será superior a 1.172 MW”, es decir, se desperdiciará el 90% del potencial de la central (Bermann 2012a: 5).

Democracia. El proyecto de Belo Monte también está provocando impactos de orden político, destacándose entre otros los que afectan al propio funcionamiento de la democracia. Los movimientos sociales que se oponen al proyecto en Belo Monte (MAB y Xingu Vivo) coinciden en señalar la falta de un proceso de consulta real con la población de los municipios afectados (Altamira, Brasil Novo y Vitoria do Xingu). Moises Da Costa, del MAB apunta que Norte Energia y el gobierno han realizado cuatro audiencias públicas en la región, pero en estas “no se consulta realmente, sólo se informa del proyecto”. No han dado

opción de realizar un referéndum para preguntar a la población autóctona (Da Costa 2012). Desde el ámbito académico el profesor Bermann (2012a: 2) también señala los límites de la democracia, porque en éste y en otros proyectos energéticos similares no se ha producido “el debate deseado” y “los procesos de toma de decisión” han sido muy autoritarios. “En este momento en Brasil estamos viviendo una autocracia energética” (Bermann 2012b).

Pero sin duda alguna, el indicador más grave del deterioro de la lógica democrática es la subordinación de las autoridades políticas a los poderes económicos. En el caso de Belo Monte el uso de fondos empresariales para financiar a instituciones públicas es quizás el caso más relevante en este sentido, destacando la financiación directa a la policía, tanto municipal como estadual (Pará). La propia policía de Altamira reconoce que Norte Energia ha financiado con siete millones de reales (casi tres millones de euros) a las fuerzas de seguridad: “la empresa entregó al gobierno del Estado de Pará, 44 vehículos, 36 motocicletas y un helicóptero para el 16º batallón de la policía de Altamira [...] este monto es apenas un primer pago de un total estimado en 100 millones de reales (40 millones de euros) previstos hasta 2013” (Policía de Altamira 2012). La agresión a la lógica democrática se agrava aún más si tenemos en cuenta que Norte Energía había conseguido que los vehículos que compró a la policía llevaran el logo de la empresa, evidenciando visualmente a quien se subordina realmente la policía.

Esta desviación democrática producto del poder político creciente del grupo Norte Energia ha llevado también a impactos negativos fuera del propio territorio brasileño. En noviembre de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA solicitó la suspensión de las obras tras evaluar críticamente el proyecto en función de la diversa documentación recogida. La reacción del gobierno brasileño fue continuar con la obra y “amenazar con la retención del apoyo financiero a la CIDH” (Bermann 2012a: 14). Otra muestra relevante de la subordinación del poder político a la empresa, frente a los organismos de derechos humanos y a la ciudadanía.

Lobby. En el marco del modelo de negocios de capital mixto instaurado por Lula y continuado por Rousseff, la práctica del *lobby* no desaparece sino que se redefine bajo una alianza entre el capital público y privado⁵. Sevá (2012a: 25) lo deja bien claro en el caso de Belo Monte, donde asegura que se produjo una alianza entre la “Asociación Brasileña de Infraestructuras”, las empresas del complejo minero-metalúrgico-energético, y el Ministerio de Minas y Energía. Las dificultades para que Belo Monte consiguiera la licencia ambiental activaron la alianza entre Norte Energia, las constructoras privadas del país y el gobierno de Brasilia, que conformaron el *lobby* que realizó una fuerte presión para que no se pusieran trabas ambientales al negocio. Bermann (2012a: 7) precisa como “la junta de analistas ambientales del IBAMA (Instituto Brasileño de Medio Ambiente) sufrieron acoso por parte de los ministerios interesados en la rápida aprobación” del proyecto de Belo Monte⁶.

El *lobby* también opera a escala municipal, en las distintas ciudades donde Belo Monte va a tener influencia. Da costa (2012) indica que “la mayoría de los políticos están a favor de la obra porque consiguen recursos para el municipio, para la gobernación, etc.”. Asumen el discurso de las empresas porque estas realizan una labor de cooptación fuerte. El caso del Partido de los Trabajadores (PT) es muy sintomático, ya que antes se oponía a Belo Monte pero ahora que están en el gobierno central, prácticamente todos sus cargos han pasado a apoyar la obra como bien recuerda Fabio Vargas (2012), activista contrario al proyecto⁷.

5 Durante el primer gobierno de Lula las empresas constructoras y la industria hidroeléctrica consiguieron que el gobierno creara un instituto de investigación energética (Empresa de Pesquisa Energética-EPE) en función de sus intereses (Seva 2012a: 1).

6 De cualquier manera, el IBAMA también recibe un beneficio de la entrega de las licencias económicas, según el profesor Sevá (2012a: 27). Por cada licencia entregada la empresa debe “destinar un 0,5% del monto total de la inversión al IBAMA”, lo cual supone “un tremendo refuerzo para su caja”.

7 Los diputados del PT de Pará siempre fueron contrarios al proyecto hidroeléctrico en el río Xingu [...] sólo

Corrupción. La práctica del *lobby* está habitualmente asociada al fenómeno de la corrupción que muchas veces termina estimulando. El proyecto de Belo Monte no es una excepción. Por una parte, Norte Energia ha estado pagando la campaña política a los partidos para asegurarse así su fidelidad. Bermann (2012b) afirma que “las empresas del consorcio de Belo Monte han estado dando fondos de campaña para el PT pero también para los otros partidos, y ahora esperan recibir los resultados de ese apoyo”. Antonia Melo (2012), portavoz de la coordinadora opositora al proyecto “Xingu Vivo” asevera que “las autoridades políticas están todas apoyando [...] callan y consienten porque para ellos también hay beneficios [...] la empresa paga sus campañas”. Claret (2012), miembro del MAB en Brasil Novo, uno de los municipios afectados, apunta que “los políticos están muy entusiasmados con el proyecto porque reciben mucho dinero [...] el interés de ellos es la reelección y continuar en el poder”.

Edizangela (2012), líder comunitaria de uno de los barrios de Altamira que será inundado por la presa de Belo Monte, indica que Norte Energia está intentado corromper a todos los grupos, ya sean políticos, sociales o económicos. Señala que “el prefecto entregó el municipio a Norte Energia a cambio de dinero, carros, etc. [...] Los concejales hicieron una reunión con Norte Energia y recaudaron de la empresa para su campaña electoral [...] Norte Energia también ha intentado comprar a las asociaciones de vecinos, pagándole a cada asociación 40.000 reales [...] con las congregaciones religiosas también han hecho lo mismo, dándoles a algunas 30.000 reales [...] así intentan comprar a todas las asociaciones y a todo el mundo”.

Criminalización y represión. El sector eléctrico en Brasil es un foco de importante conflictividad por dos variables fundamentales: por los altos costos de la energía tras la privatización de los años noventa (Gonçalves 2007, Sauer 2012, Vainer 2012), que trajo movilizaciones sociales para exigir tarifas más justas; por la construcción de grandes presas que han provocado desplazamientos de población y focos de resistencia en diferentes zonas del país. Hay que tener en cuenta que el modelo de grandes presas ha expulsado en las cuatro últimas décadas a más de un millón de personas de sus hogares, quedando un alto porcentaje de estas —alrededor de un 70%— sin ningún tipo de indemnización (MAB 2010: 17).

La presa de Belo Monte está generando importantes conflictos con diversos sectores sociales, algunos de los cuales han sido criminalizados. En primer lugar, podemos destacar el conflicto existente con la población que habita en los tres municipios afectados (Altamira, Brasil Novo y Vitoria do Xingu). Antonia Melo, portavoz de “Xingu Vivo”, movimiento social opositor al proyecto, señala que Norte Energia ha intentado criminalizarles y que ha contado con el apoyo policial y judicial. Denuncia que han sido reprimidos y que “cuatro activistas de Xingu Vivo” tienen prohibido acercarse a las obras” (Melo 2012). Desde el movimiento de apoyo a los y las afectadas por las presas (MAB), Claret (2012) asegura que la represión psicológica es muy intensa ya que la “policía te saca fotos, te intimida”. Destaca también la represión simbólica por el efecto visual de los coches de policía comprados y patrocinados por Norte Energia.

A la criminalización y represión directa contra los grupos organizados hay que sumar otra de carácter más sutil, que busca un “proceso de deslegitimación de los planteamientos antagónicos al orden oficial”. El objetivo es deslegitimar un proyecto alternativo ecológico y defender el actual modelo depredador combinando diferentes discursos demagógicos: ridiculizando a las y los opositores (“defensores de la industria del apagón de la electricidad”); tildándolos de enemigos del desarrollo (“portavoces del atraso”; “pequeña minoría contraria al progreso y al desarrollo”); acusándolos de actuar al servicio de causas externas (“ecologistas radicales al servicio del imperialismo extranjero”) (Bermann 2012a: 12).

hasta que en enero de 2003 los petistas llegaron al poder en Brasilia, y especialmente después de enero de 2007, cuando llegaron al poder en Belém (Pará) (Sevá 2012a: 29).

La criminalización también la están practicando contra los periodistas independientes. Los movimientos opositores (MAB y Xingu Vivo) destacan que la mayoría de los medios están posicionados a favor de Norte Energía, exceptuando un periodista crítico que acompaña las movilizaciones de los trabajadores y de las organizaciones sociales, que está siendo criminalizado por la empresa (Da Costa 2012; Melo 2012). El propio periodista nos transmitió que “la empresa me ha criminalizado debido al trabajo crítico que estoy haciendo” y sobre todo en los últimos tiempos, por hacer un seguimiento de la huelga de los trabajadores: “me acusan de ser el líder de la huelga [...] de los bloqueos de vía” (Sposati 2012).

Un sector que también está siendo criminalizado por la empresa y reprimido por la policía financiada por ésta es el de los trabajadores. Francinildo Teixeira, líder huelguista despedido por reivindicar condiciones laborales dignas, asegura que la policía les amedrenta de diferentes maneras: “escoltando nuestros autobuses cuando vamos a trabajar”; “sentándose en nuestros comedores con arma pesada”. A esto hay que agregar la represión directa que Norte Energía ejerce contra los huelguistas a través de sus guardias privados. Teixeira indica que él y otros huelguistas fueron agredidos en marzo de 2012 “por el capitán Paulo, de la seguridad privada de la empresa”. Norte Energía también ejerce la represión simbólica utilizando la amenaza del despido a aquellos que exijan mejores condiciones: “muchos trabajadores tienen miedo a ser despedidos [...] si reclamas, inmediatamente estás fuera de la empresa” (Teixeira 2012).

Ambiental. Las grandes presas provocan importantes impactos ambientales y en el caso de Belo Monte, debido a su tamaño descomunal (la tercera mayor del mundo), estos se van a multiplicar. Debemos destacar que la presa inundará unos 516 km² de bosque y tierras agrícolas (Becerra, 2012), pero el área afectada es tres veces mayor, unos 1.500 km² (Seva 2012a: 13). Un impacto ambiental de gran calado es la emisión de cantidades significativas de gases de efecto invernadero, debido a la materia orgánica en descomposición, con mayor intensidad en zonas tropicales. El profesor Celio Bermann recalca que este es un elemento que habitualmente se oculta pero que tiene mucha importancia: “la inundación de la selva genera un proceso de descomposición biológica que termina generando gases de efecto invernadero como el metano [...] en el caso de la amazonia es mucho más intenso por su carácter selvático [...] las presas de Balbina y de Tucuruí en el Amazonas son un buen ejemplo de ello” (Bermann 2012b).

Otro gran impacto es la destrucción de biodiversidad: por una parte, tenemos la pérdida de vegetación nativa en un territorio amazónico (Seva 2012a: 14); por otra parte, la “amenaza de extinción de especies endémicas en la parte del río que sufrirá la reducción del caudal” (Bermann 2012a: 4). Además, se va a producir un movimiento de tierras y generación de escombros similar a lo que supuso construir el Canal de Panamá: “El proyecto prevé la construcción de cinco embalses, dos vertederos hidráulicos y 30 diques de contención, de 40 a 1.940 metros de extensión y con un altura de cuatro a 59 metros. Está prevista la construcción de 52 kilómetros de canales con anchura entre 160 y 400 metros. Se realizarán excavaciones que movilizarán 50 millones de m³ de roca, superiores a las realizadas para la construcción del Canal de Panamá y el uso de 4,2 millones de m³ de hormigón” (Bermann 2012a: 3).

Otra afectación significativa es la alteración del cauce del río Xingu en un espacio de 100 kilómetros debido a la construcción de un canal de derivación de agua hacia la presa. Esta desviación supondrá una alteración del volumen de agua con consecuencias múltiples: destrucción del hábitat tradicional de animales y peces... (Bermann 2012a: 3-4). A su vez, en este momento de construcción de la obra, el movimiento de tierras y maquinaria, está afectando a la calidad del agua del río. Así nos lo manifestó Manuel Hermés, pescador tradicional de Vitoria do Xingu (Hermés 2012): “El agua se contamina por causa de los materiales de construcción, las plantas mueren y nosotros lo percibimos en la pesca”. Frente a

todo esto Norte Energía (2012a) insiste en que está cumpliendo “integralmente el proyecto básico ambiental”

Laboral. Norte Energía asegura que ofrece condiciones óptimas de trabajo, que prioriza la mano de obra local y que oferta programas de capacitación (Norte Energía 2012e). Sin embargo, en la construcción de la presa de Belo Monte la realidad es absolutamente antagónica a la retórica empresarial. En primer lugar, en cuanto a la creación de empleo es indiscutible que la construcción de la hidroeléctrica ha generado y generará en los próximos años miles de puestos de trabajo (de los 8.300 actuales a 20.000 en el momento álgido) (Lopes 2012) y que paralelamente se generarán empleos indirectos en otros sectores como la hostelería, el comercio, etc. (Brunelli 2012). Sin embargo, hay que señalar que este tipo de obras generan muchos puestos de trabajo durante unos años y atraen a población de otras regiones, pero tras su finalización el nivel de desempleo aumenta severamente, afectando a los autóctonos y a los que llegaron del exterior. Según Luiz Guerra (2012), habitante de Altamira, “la economía de la región caerá drásticamente, como en otros casos conocidos de presas en Brasil”. Desde Vitoria do Xingu, Vincenzo Zambello alerta que “es una solución inmediata [...] durante unos años ofrecen trabajo y va a entrar dinero pero cuando termine la obra, esto va a ser una gran favela, ya nadie volverá a pescar porque la presa disminuirá el volumen de peces”. (Zambello 2012).

Un campo de gran conflictividad es el de las condiciones laborales en la obra. Desde principios de 2012 se han producido diferentes huelgas para enfrentar medidas empresariales que habían supuesto un retroceso en algunos derechos (Lopes 2012, Sposati 2012, Teixeira 2012). El terreno salarial es uno de los ámbitos donde las infracciones de la empresa son muy graves. Una de las reivindicaciones es que Norte Energía pague el mismo salario a los que desempeñan la misma profesión, ya que no lo está cumpliendo (Lopes 2012). Otro de los retrocesos ha sido la supresión del pago por transporte, que suponía alrededor del 30% del salario (Sposati 2012)⁸. Además, no se les está pagando las horas extras, como confirma un ex trabajador: “trabajamos oficialmente siete horas y media pero en realidad nos obligan a trabajar nueve horas y media [...] las dos horas diarias de más no las pagan” (Teixeira 2012).

Una de las medidas más conflictivas de supresión de derechos laborales ha sido la duplicación de los meses de espera para poder ir a visitar a las familias, en el caso de los trabajadores que son de fuera. “Cada 90 días el operario que viene de lejos tenía derecho a cinco días libres para ir a visitar a su familia, pero la empresa lo suspendió y fijó que fuera cada 180 días [...] hubo una revuelta muy grande” (Lopes 2012). Lo habitual en Brasil es que en este tipo de obras se otorgue licencia cada tres meses para ir a visitar a la familia por lo que están quebrantando un derecho que está siendo aplicado en decenas de construcciones en todo el país (Sposati 2012).

En el plano de higiene y seguridad laboral también se están produciendo graves infracciones que han pasado a engrosar la larga lista de razones para que los operarios hayan decidido realizar huelgas. Por un lado, los trabajadores se quejan que el mal estado de la comida ha provocado enfermedades. Atenágoras López (2012), representante del sindicato Conlutas que está acompañando a los obreros afirma que “no hicieron una buena estructura de restaurante y en una región calurosa como el Amazonas la comida se descompone en el viaje desde Altamira hasta la obra, que está a 40 kilómetros [...] la empresa hace la comida el día de antes”. Francinildo Teixeira (2012), ex trabajador de la obra, asegura que “la alimentación es muy mala [...] la comida está caducada [...] varias personas enfermaron por el mal estado de la comida”. Otro problema está relacionado con el agua: “algunos trabajado-

⁸ “A comienzos de marzo les quitaron la hora pagada de transporte al trabajo, que es un 1/3 del salario. Para quien manda dinero a su familia es una cantidad muy importante” (Sposati 2012).

res dicen que les dan agua del río para beber, por lo menos los del cantero de Belo Monte; en los otros parece que sí les dan agua mineral, pero en Belo Monte no” (Sposati 2012).

En el mismo plano hay que destacar el mal estado de los autobuses que transportan a los operarios: “otro motivo para la huelga fue el mal estado de los ómnibus, son muy antiguos, inseguros, se estropean muchas veces [...] espero que no ocurra ningún accidente, los asientos son muy malos [...] cuando llegas al trabajo estás muy cansado” (Teixeira, 2012); “los ómnibus son tan precarios que cuando llueve tienen que abrir los paraguas para no mojarse” (Lopes, 2012). Según Dirceu Travesso (2012), dirigente del sindicato Conlutas, los trabajadores “están sufriendo condiciones de trabajo más propias del siglo XIX que del siglo XXI”.

El último gran impacto en materia laboral tiene que ver con la falta real de libertad sindical, debido a la estructura mafiosa de sindicatos pro-patronales que opera en Belo Monte y en muchas partes del país, según denuncia Lopes (2012). El sindicato ofrece empleo a cambio de dinero y exige a los trabajadores que no reivindiquen mejoras laborales porque si no serán expulsados. De esta manera, la empresa pretende asegurarse la sumisión y la paz social. A este tipo de sindicato se le llama “sindicato pelego”. “En Belo Monte el sindicato te obliga a pagarle una parte de tu salario pero sin derecho a afiliación [...] pagan como si fueran afiliados⁹ pero en realidad no son y por eso no tiene derecho a votar en las elecciones del sindicato [...] no tienen ni 300 afiliados en todo el Estado de Pará y hay más de 30.000 operarios del sector en todo el Estado”¹⁰ (Lopes 2012).

Rui Sposati (2012), periodista de investigación que ha estado haciendo seguimiento de las huelgas confirma que “el sindicato oficial no tiene interlocución con la base”. “Los trabajadores no quieren saber nada del sindicato” porque este “ha estado siempre contra las huelgas”. Formaron un sindicato alternativo y el sindicato oficial “dijo que eran grupos violentos de trabajadores” y apoyó su despido. Francinildo Teixeira, trabajador despedido de la obra por liderar un sindicato alternativo afirma que “el sindicato es pelego, porque defiende el interés de la empresa y no del trabajador. El presidente del sindicato es de la empresa Carmargo Correa [...] nunca nos han defendido y por eso creamos un sindicato alternativo [...] el sindicato compró a varios de nuestro compañeros del sindicato alternativo y luego apoyó nuestro despido¹¹. De los seis que estábamos en la comisión de negociación cuatro fuimos despedidos y otros dos pasaron al sindicato oficial¹² [...] muchos trabajadores tienen miedo a la represión de la empresa [...] si reclamas inmediatamente estás fuera (Teixeira 2012).

Comunidad. Los impactos de orden comunitario están siendo y serán probablemente los de mayor gravedad¹³, por eso es muy ilustrativo el esfuerzo propagandístico que está haciendo Norte Energia para intentar dar una imagen de empresa responsable socialmente. Sus anuncios con promesas de construcción o rehabilitación de centros de salud y educativos invaden la ciudad de Altamira¹⁴.

9 Para el sindicato oficial las cuotas obligatorias sin derecho a afiliación son un gran negocio, ya que obtienen cientos de miles de reales al año (Sposati 2012).

10 En este contexto de estructura sindical mafiosa, otros sindicatos no tienen apenas opción de trabajar con los operarios, como denuncia el sindicato Conlutas: “no tenemos acceso al cantero, no nos dejan entrar, nadie puede ir dentro de la obra” (Travesso 2012)

11 “El sindicato sacó un comunicado contra la huelga [...] llamando a los huelguistas vándalos” (Lopes 2012).

12 “El sindicato oficial intenta siempre cooptar a los compañeros de la base que ejercen el liderazgo de las reivindicaciones” (Lopes 2012).

13 A pesar de que consideramos que hemos realizado una buena recogida de datos en relación a los impactos que está generando y que en un futuro generará la obra, estamos seguros de que se producirán otra serie de impactos a medio y largo plazo de gran trascendencia, que a día de hoy son difíciles de identificar pero que terminarán teniendo una notable importancia con el paso de los años.

14 El consorcio empresarial publicita diferentes proyectos en la región: promoción de la salud (Norte Energia 2012a), construcción y rehabilitación de escuelas (Norte Energia 2012b), tratamiento de residuos urbanos ((Norte Energia 2012d), preservación de peces ((Norte Energia 2012f).

El primer gran impacto en la comunidad y el más evidente es el desplazamiento de miles de personas que provocará la construcción de la presa. Desde el movimiento de apoyo a las y los afectados por las grandes presas estiman que serán desplazadas 40.000 personas aproximadamente: “el IBAMA (Instituto Brasileño de Medio Ambiente) dijo que serían 16.000 los que tendrían que salir de sus casas (en zona rural y en zona urbana) pero por experiencia sabemos que ese número subirá [...] por lo menos hasta 40.000 [...] siempre aumenta el número de afectados” (Da Costa 2012). Celio Bermann (2012b), puntualiza que en realidad no hay que definir a estas personas como “desplazadas”, ya que el término correcto es “expulsadas”.

Un barrio que será inundado tras la construcción de la presa es el de Boa Esperanza en Altamira, donde vive población en condiciones de pobreza extrema. Según testimonios de sus habitantes, “Norte Energia se ha aliado con los empresarios de la ciudad para decidir sobre nosotros [...] los empresarios quieren hacer negocio construyendo casas de reasentamiento, quieren cooptar a las asociaciones de vecinos [...] a algunos ya les han comprado [...] entregaron computadoras en el barrio para que fuéramos a las audiencias que habían montado con Norte Energia” (Edizangela 2012). Se observa como Norte Energia permite que funcionen las redes clientelares empresariales. Además, la experiencia histórica brasileña demuestra que una buena parte de los afectados han sido indemnizados de manera muy limitada, según estudios del MAB y en el caso de Belo Monte no se percibe que vaya a revertirse la tendencia, según Da Costa (2012).

Al igual que ha ocurrido con otras presas en el país, en el caso de Belo Monte sólo se consideran afectadas a aquellas personas que van a tener que desplazarse por causa de inundación, por lo que miles de habitantes no serán previsiblemente indemnizados, alerta el profesor Sevá (2012a: 12)¹⁵. Estamos hablando de miles de personas que verán modificada su forma de vida y su economía tradicional debido al impacto de la presa. Un sector será el de los agricultores que viven en la ribera del río Xingu y que dispondrán de un caudal de agua mucho menor para regar, por causa del desvío del cauce (Guerra 2012). Otros que sufrirán severamente el desvío del cauce son los miles de pescadores de Vitoria do Xingu, Altamira y zonas rurales. Manuel Hermes, pescador tradicional de Vitoria do Xingu alerta del gran impacto que tendrá el desvío del río y la contaminación del agua: “nos entrevistamos con pescadores afectados por la presa de Tucuruy que fue construida en 2002 y nos contaron que tuvieron muchos problemas con la pesca [...] sufrieron mucho [...] 15 años sin poder pescar [...] y aquí vemos que va a ocurrir lo mismo” (Hermes 2012).

Una variable que ya está generando diversos impactos en la comunidad y que se acentuará en los próximos meses es la llegada masiva de personas de otros municipios y regiones, que se desplazan con la esperanza de poder encontrar trabajo. Bermann (2012a: 8) calcula que alrededor de 100.000 personas llegarán a la zona en los próximos años, lo que supondría duplicar el actual tamaño del municipio más grande (Altamira) que apenas sobrepasaba en 2010 los 100.000 habitantes. Esto se producirá además en un territorio donde históricamente la presencia del Estado ha sido muy débil, donde las infraestructuras de salud, educación, etc. son sumamente precarias, por lo que se generará un importante colapso en los servicios públicos. Para mediados de 2012, los efectos ya se estaban sintiendo, según manifestaron gran parte de las personas entrevistadas (Melo 2012, Da Costa 2012, Guerra 2012, Morera 2012, Zambello 2012). Altamira, por ejemplo, un año después del inicio de la obra aumentó su población un 40% aproximadamente. Fabio Vargas, ciudadano de Altamira, asegura que “miles de personas vienen atraídas por la obra [...] y todavía no hemos llegado al pico de la obra; es decir, va a llegar mucha más gente [...] algunos llegaron a la región para conseguir

15 Hay que recordar que históricamente la construcción de presas ha estado asociada a mínimas compensaciones a los afectados, según recuerda el profesor Bermann (2012a: 10-11).

empleo pero no lo consiguieron y ahora están viviendo en la calle, junto a la carretera” (Vargas 2012).

El colapso de los servicios públicos se refleja con mucha claridad en el sector de la salud, que se encuentra saturado e imposibilitado para brindar servicio a toda la población. Esta situación ha llevado a que las y los trabajadores del sector hayan convocado varias huelgas para exigir una ampliación de la plantilla en consonancia con el aumento poblacional: “la atención era muy precaria antes y ahora lo es más [...] una de las condiciones era habilitar los servicios de salud pero aquí no se hizo” (Da Costa 2012). El colapso también se está sintiendo en el tráfico, con el aumento exponencial del número de vehículos, mientras que la infraestructura viaria sigue siendo la misma (Da Costa 2012). Esta situación no es exclusiva de Altamira, sino que también se reproduce en los municipios cercanos, como Vitoria do Xingu: “la ciudad no tiene estructura para recibir tanta población [...] el hospital está colapsado” (Zambello 2012).

El aumento poblacional también está incidiendo en el crecimiento de la inseguridad, según señalan habitantes de Altamira (Melo 2012, Morera 2012). La obra no ha podido absorber a los miles que llegan y la desestructuración social se está agudizando, en una región ya de por sí empobrecida. Han aumentado “los robos, los asaltos, la seguridad pública está cada vez peor” (Melo 2012). Otro efecto de la llegada masiva de población ha sido el aumento de la inflación en rubros como la alimentación y la vivienda. “Ha habido aumento de precios en alimentos, en vivienda, en restaurantes, en las escuelas; todo aumentó” (Da Costa 2012). “Un grave problema es la vivienda, la especulación inmobiliaria tras la llegada de la empresa [...] Antes alquilábamos por 200 reales y ahora cuesta 200 o 300% más” (Morera 2012).

En el apartado de los impactos de género, el más relevante es el aumento de la prostitución asociada también a la llegada masiva de miles de personas (Oliveira 2012, Da Silva 2012, Melo 2012). Adriana Oliveira, perteneciente al MAB, asegura que con la construcción de Belo Monte “las mujeres están sufriendo mucho [...] se ha producido un aumento de la prostitución debido a la llegada masiva de trabajadores sin familia que buscan mujeres [...] las chicas que viven en la periferia pobre caen en la prostitución [...] les compran ropas, calzados, celulares [...] es otra forma de desestructuración social en un contexto de mucha precariedad y alto desempleo [...] también la inseguridad contra la mujer ha aumentado” (Oliveira 2012). En Vitoria do Xingu, también se produjo un aumento sustancial de la prostitución por la misma causa, según indica Marinalva Da Silva (2012), habitante del municipio¹⁶.

Pueblos indígenas. Otro grupo humano que no ha quedado al margen de los impactos de Belo Monte es el de los pueblos originarios. Por una parte, el gobierno brasileño ha sido acusado de no consultar a las comunidades indígenas como marca el Convenio 169 de la OIT: “un informe de la Comisión de Especialistas en Aplicación de Convenciones y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) confirma que el gobierno brasileño debiera haber consultado a los pueblos indígenas afectados por la construcción del proyecto hidroeléctrico antes de comenzar su construcción” (Becerra 2012).

Pero el impacto más negativo provocado directamente por Norte Energia es la política de cooptación de los líderes indígenas, con objeto de neutralizar la resistencia que estaban desarrollando en los últimos años (Seva 2012a: 30, Claret 2012, Melo 2012, Sposati 2012, Ribeiro 2012). Cleanton Ribeiro, coordinador del Consejo Indigenista Misionario (CIMI) en Altamira, señala que “hasta 2009 los indios lucharon contra Belo Monte, pero de 2010 en adelante fueron neutralizados y no quieren hablar sobre Belo Monte [...] la cooptación

16 En Brasil, en la construcción de algunas presas se han dado casos extremos como el de Rondonia, en donde el periodista e investigador Rui Sposati (2012) asegura que “durante la construcción de la hidroeléctrica, la empresa llegó a pagar a sus trabajadores parte de su salario con bonos para ir a prostíbulos”.

se dio a través de los líderes indígenas [...] los compraron para que luego convencieran a sus bases”. La empresa provocó la división entre las comunidades: “dos años atrás había 19 aldeas y hoy tenemos 34, producto de la cooptación y de la división que generaron” (Ribeiro 2012)¹⁷.

Los pueblos indígenas han sido cooptados a través de las mercancías que Norte Energia les entrega mensualmente. Ribeiro apunta que “la empresa reunió a los líderes y prometió que les pagarían 30.000 reales por mes a cada aldea; en realidad no les entregan el dinero sino que cada aldea hace una lista de mercancías, se la entrega al FUNAI (Fundação Nacional Do Índio) y este se la pasa a Norte Energia para que compre [...] los indios no son favorables a Belo Monte, pero callan porque reciben los 30.000 reales”¹⁸. Les entregan alimentos enlatados y refrescos, por lo que se “está modificando su alimentación”. Esto está teniendo impactos en la economía tradicional ya que “están empezando a abandonar sus cultivos”. Además, “compraron barcos a motor para todas las aldeas” y mensualmente les entregan combustible (Ribeiro 2012)¹⁹.

Esta política de cooptación empresarial está también generando efectos graves en las prácticas culturales y en los roles tradicionales de sus dirigentes: “hoy día un cacique aparece en la aldea repartiendo refrescos, regalando recursos de Norte Energia”, banalizando su rol sagrado (Ribeiro 2012); “a un cacique lo vi distribuyendo con un carro alimentos a su comunidad; imagina una persona que tiene un papel tan extremadamente importante y ahora repartiendo comida en un carro [...] ves indígenas transitando por escritorios de Norte Energia recogiendo cosas [...] Están urbanizando a los indígenas [...] eso es la muerte del pueblo indígena” (Claret 2012); “comienzan a consumir como en la ciudad, se está desestructurando a estos pueblos, es muy cruel [...] están modificando la dinámica cultural de estos pueblos” (Sposati 2012).

Conclusiones

Norte Energia está desarrollando uno de los emprendimientos más controvertidos a escala internacional, por los impactos desmesurados que provocará la construcción de la tercera presa más grande del mundo, en un territorio tan emblemático como es el Amazonas. En el terreno económico, el proyecto de Belo Monte se inserta dentro de un plan a largo plazo para colonizar la Amazonia y construir un buen número de presas que provean al complejo minero-metalúrgico transnacional de energía eléctrica barata, en función de los intereses del capital. La rentabilidad para las empresas que componen Neenergia será muy grande: por una parte, porque generarán electricidad muy barata (hidroeléctrica), para posteriormente vender muy caro a través de sus distribuidoras (Neenergia, etc.) a la ciudadanía; por otro lado, porque tres cuartas partes va a ser financiado con dinero público, a través del Banco Nacional de Desarrollo (BNDES); por último, porque la alta tasa de explotación laboral les reportará un mayor margen de plusvalía.

Belo Monte también está lesionando severamente el funcionamiento de la democracia porque la comunidad afectada no ha sido realmente consultada (sólo ha sido informada) y porque Norte Energia tiene tanto poder que ha logrado subordinar en un grado extremo al poder político, llegando incluso a evidenciar visualmente su control de las fuerzas policiales. El *lobby* de la empresa ha sido tan efectivo que el grueso de la clase política local y regional opera al servicio de la corporación, obteniendo su parte de lucro. A los sectores

17 Antonia Melo (2012) afirma que “están tratando a los indígenas como en la época de 1.500 [...] dándoles comida y equipamiento para que se queden callados”.

18 Sposati (2012) considera que “no es que los indios quieran a Norte Energia; no quieren a la empresa pero como veían que no se podía parar la obra están intentando sacar un beneficio”.

19 Sposati (2012) indica que Norte Energia regaló a los caciques televisiones de plasma, cámaras de fotos, etc. para cooptarlos.

que todavía se oponen al megaproyecto (movimientos sociales, sindicatos alternativos, periodistas críticos, etc.), Norte Energia ha logrado criminalizarlos y que las fuerzas del orden los tengan amedrentados.

En el plano medioambiental, la inundación de selva amazónica provocará la emisión de gases de efecto invernadero (metano), además de ocasionar graves pérdidas en términos de biodiversidad, amplia erosión de suelos y contaminación de aguas. Los impactos en las condiciones laborales son también de grandes dimensiones. Las infracciones en materia salarial son sumamente graves: distinto salario por la misma profesión, reducción de un 30% del sueldo como consecuencia de la supresión del pago por transporte, no retribución de las horas extras. El derecho para ir a visitar a la familia a las y los trabajadores de fuera de la región ha sido infringido, al pasar de cinco días cada tres meses a cinco días cada seis meses. Los niveles de seguridad e higiene en el trabajo son denigrantes: comida en descomposición, agua del río para beber, estado lamentable del transporte. A todo esto hay que sumar la alianza entre la empresa y el sindicato oficial de corte pro-empresarial (“pelego”), que opera de facto contra los intereses de los trabajadores. Esto ha llevado al surgimiento de sindicatos alternativos, que están siendo duramente reprimidos y sus líderes despedidos sistemáticamente de la obra.

Los impactos comunitarios están siendo ya severos y en futuro serán muchísimo más graves. 40.000 personas serán desplazadas (“expulsadas”) de sus casas y de su hábitat. Además, otros miles de afectados “indirectos” —que no sufrirán teóricamente la inundación— no serán en principio indemnizados, a pesar de que su modo de vida y su economía tradicional se verán afectados (pescadores, agricultores). La llegada masiva de miles de personas con la esperanza de encontrar un trabajo en Belo Monte está generando y va a generar en el futuro un colapso social de altas proporciones, en una zona del país con infraestructuras muy deficientes. El desbordamiento de los servicios públicos (salud), el aumento de la inseguridad y de la inflación y el incremento de la prostitución son algunos de los primeros efectos. A esto hay que sumar los impactos severos en los pueblos indígenas: por un lado, no se les ha consultado como exige la Convención 169 de la OIT; por otro lado, Norte Energia les ha neutralizado cooptando a sus líderes y comprándoles directamente por medio de la entrega regular de víveres y otros artículos. El abandono de su economía tradicional y la banalización de algunas de sus prácticas culturales tradicionales se están evidenciando cada vez con más claridad.

Todos estos impactos y los nuevos que probablemente irán surgiendo en el futuro, ponen en entredicho las promesas de desarrollo que se han realizado con la construcción de la tercera presa más grande del mundo y evidencian la lógica desarrollista que inspira al proyecto.

Bibliografía

- Achbar, Mark & J. ABBOT. 2009. *La Corporación*. Documental. ISAAN Entertainment S.L.
- Becerra 2012. La OIT denuncia que Brasil violó el convenio 169 en el Xingú. *Otramérica*. 10-03-2012.
- Bermann, C. & F. Del Moral. 2012a. Las megas obras y los límites de la democracia. El proyecto de la central hidroeléctrica de Belo Monte en la amazonia brasileña. *Revista Energía y Equidad*, nº 2, 2012.
- _____. 2012b. *Entrevista personal*. 12-04-2012. Sao Paulo.
- Berraondo, M. 2008. Aplicación del derecho o programas de RSC para pueblos indígenas. *Revista de Relaciones Laborales ‘Lan Harremanak’*, nº 19. 2008-II: 89-116.
- Brunelli, A. 2012. *Entrevista personal*. 20-04-2012. Brasil Novo.
- Carrión, J. & T. Verger. 2007. Amistades peligrosas: empresas transnacionales, poder político y poder mediático. Editado por OMAL. *Las empresas transnacionales en la globalización*. Madrid: OMAL.

- CEPAL. 2012. La inversión extranjera directa en energía eléctrica en América Latina y el Caribe 2011. Editado por CEPAL. *La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile.
- Claret, A. 2012. *Entrevista personal*. 14-04-2012. Altamira.
- Da Costa, M. 2012. *Entrevista personal*. 14-04-2012. Altamira.
- Da Silva, M. 2012. *Entrevista personal*. 17-04-2012. Vitoria do Xingu.
- Edizangela. 2012. *Entrevista personal*. 20-04-2012. Altamira.
- Gonçalves, D. 2002. *Reestruturação do setor elétrico brasileiro: estratégia de retomada da taxa de acumulação do capital?* Tesis de Maestría en Energía. Universidade de São Paulo.
- _____. 2007. *Reformas na industria eletrica brasileira. A disputa pelas fontes e o controle dos excedentes*. Tesis doctoral. Universidade de Sao Paulo.
- Guerra, L. 2012. *Entrevista personal*. 14-04-2012. Altamira.
- Hermes, M. 2012. *Entrevista personal*. 17-04-2012. Vitoria do Xingu.
- Hernández Zubizarreta, J. 2009a. ¿Lex mercatoria o derechos humanos? Los sistemas de control de las empresas transnacionales. Editado por Hernández Zubizarreta, J. y Ramiro, P. *El negocio de la responsabilidad. Crítica de la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas transnacionales*. Barcelona: Icaria&Antrazyt.
- _____. 2009b. *Las empresas transnacionales frente a los derechos humanos: historia de una asimetría normativa*. Tesis doctoral. Bilbao: Hegoa.
- Iberdrola. 2012. *Informe de resultados. Nueve meses de 2011*. Iberdrola.
- Lopes, A. 2012. *Entrevista personal*. 11-04-2012. Sao Paulo.
- MAB. 2010. *Informe sobre la actuación de la empresa Iberdrola-Neoenergía en Brasil*. Sao Paulo. Movimento dos Atingidos por Barragens.
- Melo, A. 2012. *Entrevista personal*. 18-04-2012. Altamira.
- Morera, F. 2012. *Entrevista personal*. 17-04-2012. Altamira.
- Norte Energia. 2012a. Saude: essa e a energia. Programa de vigilância epidemiológica. *Díptico-Propaganda de la empresa*. Altamira: Nortenergia.
- _____. 2012b. Educação: essa e a energia. Infraestrutura e serviços de educação. *Díptico-Propaganda de la empresa*. Altamira: Nortenergia.
- _____. 2012c. Prevenção: essa e a energia. Programa de ação e control da malária. *Díptico-Propaganda de la empresa*. Altamira. Nortenergia.
- _____. 2012d. “Qualidade de vida: essa e a energia. Projeto de saneamento”. *Díptico-Propaganda de la empresa*. Altamira: Nortenergia.
- _____. 2012e. Trabalho: essa e a energia. Programa de capacitação de mao de obra. *Díptico-Propaganda de la empresa*. Altamira: Nortenergia.
- _____. 2012f. Presevação de peixes da região. *Díptico-Propaganda de la empresa*. Altamira: Nortenergia.
- _____. 2013. Página web corporativa. <http://nortenergiasa.com.br/site/>
- Oliveira, A. 2012. *Entrevista personal*. 14-04-2012. Altamira.
- Petras, J. & H. Veltmeyer. 2007. *Juicio a las multinacionales. Inversión extranjera e imperialismo*. Madrid: Editorial Popular.
- Policía de Altamira. 2012. *Informativo policial. Abril 2012*. Distribución gratuita. Estado do Pará.
- Ramiro, P. 2011. El segundo desembarco: los impactos de las multinacionales españolas en América Latina. Editado por S. Álvarez. *Convivir para perdurar. Conflictos ecosociales y sabidurías ecológicas*. Barcelona: Icaria-Antrazyt.
- Ribeiro, Cleanton 2012. *Entrevista personal*. 19-04-2012. Altamira.
- Sánchez Pérez, J. 2008. El poder de las empresas multinacionales. *X Coloquio Internacional de Geocrítica. Diez años de cambios en el mundo, en la geografía y en las Ciencias Sociales, 1999-2008*. Barcelona 26-30 de mayo de 2008: Universidad de Barcelona.
- Sauer, I. et al. 2011. Energía, recursos minerales e desenvolvimento. Inédito. Sao Paulo.
- Sauer, I. 2012. *Entrevista personal*. 10-04-2012. Sao Paulo.
- Seva. O. 2012a. Belo Monte de mentiras! A historia nada exemplar dos projetos hidreletricos no maravilhoso rio Xingu, inventados pelos mafiosos e herdeiros da ditadura militar. Inédito.
- _____. 2012b. *Entrevista personal*. 14-04-2012. Campinas.
- Sposati, R. 2012. *Entrevista personal*. 18-04-2012. Altamira.

-
- Teitelbaum, A. 2010. *La armadura del capitalismo. El poder de las sociedades transnacionales en el mundo contemporáneo*. Barcelona: Icaria-Antrazyt.
- Teixeira, F. 2012. *Entrevista personal*. 19-04-2012. Altamira.
- Travesso, D. 2012. *Entrevista personal*. 11-04-2012. Sao Paulo.
- Uharte, L. 2005. Política social y democracia: un 'nuevo' paradigma. *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, vol. 11, n° 3, sept-dic: 93-114.
- Vainer, C. 2012. *Entrevista personal*. 04-04-2012. Rio de Janeiro.
- Vargas, F. 2012. *Entrevista personal*. 14-04-2012. Altamira.
- Zabalo, P. 2007. El papel de las multinacionales en la economía globalizada. Editado por OMAL. *Las empresas transnacionales en la globalización*. Madrid: OMAL.
- Zambello, V. 2012. *Entrevista personal*. 17-04-2012. Vitoria do Xingu.

